

Hay filósofos morales capaces de grandes cochinadas en un concurso de cátedra, como hay creadores de vanguardia, ardientemente contrarios a la cultura oficial, capaces de remover cielo y tierra por lograr una subvención o un premio.

La popularidad puede ser, en este sentido, tan corruptora al menos como el poder o el dinero. Y puede deslumbrar especialmente a quienes por su profesión no están acostumbrados a ella: en este sentido, un actor que adquiere dimensión pública por su toma de posición política está más vacunado que el pensador o el probo funcionario del Estado. Al fin y al cabo, el actor ya sabe lo que es la Popularidad, ser reconocido por la calle, aparecer en los medios. En cambio, para quien ha adquirido reconocimiento social por su ejercicio profesional, en campos inicialmente alejados de la atención pública, el brusco protagonismo alcanzado al tomar partido puede crear adicción.

Convencido de que su popularidad es el reconocimiento social de un mérito propio, para el intelectual puede ser duro aceptar el ejercicio de la política como proyecto colectivo. Y no es extraño: el político tiene que aprender a sufrir procesos electorales y críticas muy destructivas, que el intelectual no tiene por qué soportar si ha consolidado una posición en su propio ámbito. Podríamos decir, en estos tiempos marcados por el protagonismo del mercado, que cuando el intelectual entra en política experimenta un súbito sentimiento de reconocimiento que vive como un *capital social* que pasa a formar parte de su patrimonio. Y desde ese momento, toda crítica, a él mismo o a la opción por la que ha tomado partido, aparece como una amenaza de perder ese capital, ante la que puede tener fácilmente la tentación, como algunos empresarios, de llevarse su capital a casa o a otra parte: de desinvertir.

Ése es el problema de los intelectuales ante la política: que es más fácil aconsejar a los demás sobre sus inversiones que comprometer el propio capital, especialmente cuando el mercado es impredecible. Sin embargo, hay momentos en que un intelectual honesto no puede dejar de tomar partido: ante una dictadura, o cuando está en juego un gran proyecto colectivo.

Pero, si se quiere hacer algo más que firmar manifiestos (o si se quieren firmar responsablemente, para evitar lo que podríamos llamar el *síndrome de Sartre*), la toma de partido no puede ser vivida como una aventura personal, como un juego de Bolsa, sino como una inversión que es preciso mantener también cuando las cosas van mal. Sobre todo, pensando en esos pequeños accionistas, los ciudadanos de a pie, que pueden perder sus ahorros por una acumulación de egoísmos patrimoniales.

*El País*, 23 de febrero de 1995

# Una cuestión de profesión

Por Guillermo Gortázar\*

**L**as recientes y espectaculares *deserciones* de la actividad política de dos magistrados, hasta hace poco diputados a Cortes, invita a la reflexión sobre la naturaleza de la actividad política y de las relaciones de los intelectuales, profesionales o independientes con el poder.

El problema de fondo en la participación de los intelectuales en el poder se deriva de la distinta naturaleza de la política y de la tarea intelectual. El político busca el poder y forma parte de lo que Mosca y Pareto definieron como clase política. Un político, como un empresario y tantas otras profesiones, tarda años en comprender y desarrollar las múltiples facetas de la acción política (el debate, la representación y defensa de intereses, el

discurso, los modernos medios de comunicación, etcétera). Por otra parte, el intelectual que irrumpe en la política tiene que adaptarse a una nueva profesión y se tiene que poner al servicio de un fin político, a través de un partido, en una monarquía parlamentaria. En otras palabras, el intelectual, como cualquier otro ciudadano, puede participar en política, pero tiene que convertirse en político, anteponer su nueva condición de político a la de intelectual. Si para un intelectual lo esencial es la búsqueda de la verdad absoluta, para un político lo importante son valores y principios y el permanente contraste de su programa político con la realidad y, por tanto, sometido al cambio y adaptable a cada época y circunstancia.

En España, la influencia de los intelectuales, considerados como chamanes, al margen de la política pero muy influyentes en la opinión y en el poder, no fue desta-

cada hasta los años veinte y treinta del siglo XX. Por el contrario, esa influencia no se produjo en el siglo XIX español. Desde 1834 lo mejor de la clase política generada en las Cortes de Cádiz y en la constitución del régimen liberal aseguraron una larga época de parlamentarismo y libertad, en medio de grandes dificultades militares y económicas.

En la historia reciente de España, la irrupción de la influencia política de los intelectuales, literatos, profesionales (Ortega, Azaña, Marañón) se produce en 1923, con la dictadura de Primo de Rivera. Primo disolvió a la clase política de la Restauración, condujo a Alfonso XIII al exilio y produjo un vacío político que ocuparon los intelectuales y profesionales liberales como protagonistas de la acción política, en la Segunda República, en 1931. Aquella República, llamada con razón «de los intelectuales», fue una demostración de los

\* Guillermo Gortázar es secretario de formación del Partido Popular.

costes de la improvisación de una nueva clase política, de su sustitución por independientes, intelectuales y profesionales.

A diferencia de los políticos profesionales de la Restauración, que eran especialistas en la transacción y buenos concededores del peso de la realidad y de la tradición, la nueva clase política republicana de profesionales e intelectuales intentó crear, en 1931, un régimen político *ex novo* y, en gran medida, en contra de una buena parte de la opinión del país, en particular de los católicos. Sin duda no es éste el lugar para analizar en su conjunto la dramática experiencia final de los años treinta. Pero lo que sí me interesa destacar es que, cuando se reinaugura en España, en 1977, una nueva experiencia política democrática con la transición, los políticos profesionales que la protagonizaron, muchos de ellos con una sólida formación intelectual, tuvieron muy presente las enseñanzas de la historia. Y así, a diferencia de 1931, en 1977 prevaleció el

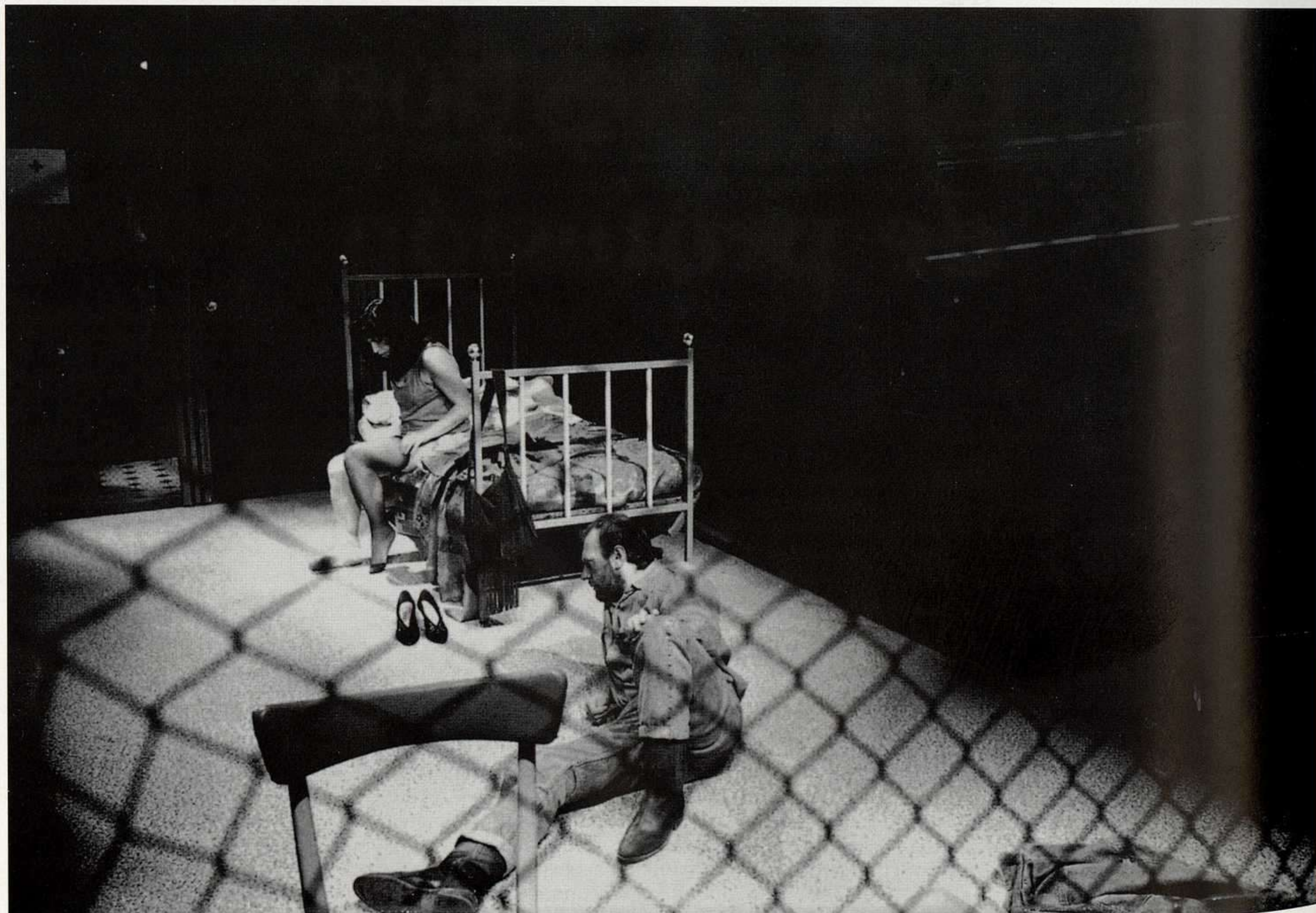
deseo de hacer una Constitución para todos los españoles sin exclusiones. Otro resultado de la experiencia de 1931 fue la decisión de no contar con los intelectuales *puros* en toda la operación de la transición. Quizás por ello la Constitución de 1978 ha permitido el segundo período más largo de libertad y estabilidad después de los cincuenta largos años de vigencia de la Constitución de 1876.

En la moderna política democrática, un partido se parece mucho a una empresa de servicios que compite en un «mercado electoral» por una porción o cuota del electorado. En España todavía no hemos llegado al extremo de seleccionar a algunos candidatos a través de anuncios de prensa, como en Alemania, pero esto es algo que provisionalmente puede ocurrir en breve plazo. Es decir, en la lucha política por ampliar la cuota electoral, los partidos están interesados en atraer e incorporar a buenos profesionales e independientes a la política (mucho más fácil

en las responsabilidades ejecutivas que en la tarea parlamentaria), y esto es sin duda muestra de normalidad y de competencia política.

En la España de 1995, el retorno de dos magistrados independientes a la Audiencia Nacional ha supuesto un elemento añadido de tensión en la vida política. Da la sensación de que el presidente González se debate entre el síndrome de Nixon con el Watergate -«no sabía nada»- y el de Luis XV -«después de mí, el diluvio»-. El empecinamiento del presidente del Gobierno en no dar una salida política a la crisis que atraviesa el Gobierno amenaza el futuro del partido socialista y al conjunto del sistema. Desde el punto de vista de la estabilidad democrática, lo que sería grave es que la prolongación de la profunda crisis política del Gobierno socialista nos condujera a una crisis generalizada de las instituciones democráticas.

*El País*, 23 de febrero de 1995



"Tolos de amor", de Sam Shepard. Dirección: Xulio Lago. (1995).